



EL DISLATE DE NEGOCIAR CON LAS “DISIDENCIAS”

Desde el jueves pasado y hasta este domingo, el gobierno está reunido con las disidencias que comanda Mordisco y que se hacen llamar Estado Mayor Central de las Farc. El encuentro, en el Cauca, tiene “carácter cerrado y confidencial” y servirá para acordar la “agenda de temas” previos a la negociación de un cese del fuego y los “protocolos de respeto a la población civil”, según un boletín de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Según Ingrid Betancourt, “las tales disidencias de las Farc, todo ese escenario de que se dividieron, se pelearon, que unos se fueron para el Congreso y otros al monte, es simplemente una estrategia para quedarse con el pan y el queso”, dijo en recientes declaraciones a la revista Semana. “Unos lograron que los quitaran de las listas de terroristas y los incluyeran en la vida nacional, pero el negocio lo siguieron manejando los otros [...] Aquí lo que tenemos es una estrategia para mantener vivo ese negocio que no querían soltar”, agregó.

Desde la firma del pacto con Santos, ha estado latente la idea de que hubo una estrategia concertada en las Farc para, por un lado, sacar ventajas políticas, económicas y judiciales de una negociación con Santos y darle una jubilación de oro a unos guerrilleros, pagada además por el Estado, y, por el otro, dejar a otra fracción en el control del negocio del narcotráfico. Se puede estar de acuerdo o no con esa hipótesis, pero lo que es innegable es que los frentes más involucrados con el narco, como el 1 y el 40, jamás se desmovilizaron, que incluso los dos jefes de las Farc en los diálogos en La Habana, Márquez y Santrich, siguieron vinculados al negocio del narcotráfico durante y después de las conversaciones y mantenía contactos con las aparentes disidencias, y que cuando fueron descubiertos se devolvieron al monte, y que las facciones aparentemente disidentes de las Farc se han ido expandiendo y fortaleciendo desde la celebración del acuerdo.

Lo que está claro, y no puede dejar de insistirse en ello, es que el narcotráfico ha sido y sigue siendo el motor de la violencia en nuestro país y que sin una acción contundente contra el narco, en todas sus facetas, será imposible ponerle fin al conflicto armado y disminuir de manera drástica los nefastos efectos de la delincuencia organizada. Exactamente lo contrario a lo que está haciendo Petro que, una vez detrás de la otra, toma decisiones y hace anuncios y declaraciones que fortalecen a los narcotraficantes y su negocio y que, además, alimentan las sospechas de que el Pacto de la Picota fue una realidad.

Por otro lado, es indispensable preguntar si tiene o no sentido y si es legal abrir negociaciones con un grupo que se negó a aprovechar los regalos que Santos le hiciera a las Farc en su pacto. Resolver la pregunta de si son legales es fundamental. Para mí es claro que no lo son, que en lo pactado por Santos quien no se acogiera a las negociaciones se le aplicaría todo el peso de la ley y que después no se podía darle beneficios para su desmovilización.

Pero aún si fueran legales, tampoco parece razonable abrir una y otra vez negociaciones con violentos que se negaron en su oportunidad a

pactar con el Estado. Es un incentivo perverso, un mensaje de que se puede seguir asesinando que igual, en todo caso, tarde o temprano el gobierno se arrodillará de nuevo. Y de que el camino para la impunidad en el asesinato y, en general, en el delito, es el de la organización criminal. Si se mata mucho y por mucho tiempo, arropado en un grupo criminal, no solo se asegura que el delito no será sancionado, sino que se obtendrán beneficios políticos y económicos que el ciudadano de bien, el que nunca ha delinuido, jamás recibirá. No es solo que el estado de derecho no se respete y que no haya sanción al delito, sino que se rompe el principio de igualdad frente a la ley para tratar mejor al criminal.

No se me ocurre nada que pueda hacer más daño a la ética y la cohesión de la sociedad que semejante mensaje. Un mensaje que se repite y amplifica, por cierto, en ese programa espantoso que pretende “pagar para no matar”, programa que, además, abre la discusión, planteada por Carlos Alonso Lucio, de si lo que quiere Petro por esa vía es la “milicianización” latente de los jóvenes beneficiarios del programa.



**RAFAEL
NIETO
LOAIZA**

  [rafanietoloaiza](#)